

SECRETARIA: Santiago de Cali, 19 de mayo de 2023. A Despacho del Señor Juez, informando que la parte ejecutante, impetró recurso de reposición y subsidiariamente apelación, contra el auto interlocutorio No. 0.193 del 18 de abril de 2023, notificado por estados el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual, se resolvió sobre el decreto de las pruebas solicitadas. Sírvese proveer.

La secretaria,

Gloria Stella Zúñiga Jiménez

Auto Interlocutorio No. 471

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Santiago de Cali, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

I.- OBJETO

Se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por R.G & CIA S.A.S., en contra del auto de 18 de abril de 2023, notificado el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual, se resolvió sobre el decreto de las pruebas solicitadas.

II.- ANTECEDENTES

1.- Mediante auto del 18 de abril del año en curso el juzgado decretó algunas pruebas solicitadas por las partes, negando a R.G & CIA S.A.S. la declaración de parte de la señora KATHY OSORIO, representante legal de R.G. & CIA S.A.S, bajo el fundamento que la misma resulta improcedente, ya que dicha declaración pretendida puede ser absuelta con el interrogatorio de parte que se les formula a las partes intervinientes dentro de presente proceso.

2.- El apoderado judicial, de la parte demandante, inconforme con la decisión impetró el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, bajo el entendido que se suscitó una equivocación por parte del despacho al declararla improcedente teniendo en cuenta que, según el código general del proceso, la declaración de parte es un medio probatorio autónomo e independiente.

Agrega que, si bien el art. 198 del C.G.P. permite citar a interrogatorio a las partes sin utilizar el término “contraparte”, conforme la literalidad del artículo de la siguiente manera:

“se entiende que se suprimió o eliminó del ordenamiento jurídico la exigencia de que el interrogatorio debía ser solicitado únicamente por la parte

contraria, para en su lugar, permitir que los extremos procesales puedan rendir su versión o declaración en relación con los hechos objeto de litigio.”

(...)

Aquello que los doctrinantes procesalistas han llamado “sesgo inherente” no impide que un togado interroge a quien le ha conferido poder en el proceso, pues el ejercicio valorativo del juez puede graduar el mérito probatorio de la declaración de la propia parte, según perciba faltas de objetividad en su versión, como si se tratara de un testimonio que fue tachado por parcial o sospechoso.

Además de lo anterior, es importante señoría que tenga en cuenta que si bien el declarante que asista como representante legal de R.G. & CIA S.A.S puede responder las preguntas que usted le formule en el marco del interrogatorio de parte oficioso, dicho motivo no excluye la posibilidad de que el suscrito pueda interrogarle mientras las preguntas no sean impertinentes, inconducentes, reiterativas, ni irregulares en ninguna forma prevista en el art. 221 del CGP. Es decir que el cuestionario que el suscrito formularía, buscaría simplemente generar respuestas que, durante el interrogatorio de oficio, o el de contra parte que formule el togado de la Aseguradora ejecutada no se hubieran dado.

Por lo anterior, solicita se decrete la declaración de parte o en caso contrario, se conceda el recurso de apelación ante el superior jerárquico.

3.- Corrido el traslado de rigor efectuada por la parte ejecutante según remisión del citado recurso a la parte ejecutada, esta última guardó silencio sobre el mismo encontrándose pendiente para resolverse, previas las siguientes consideraciones.

III.- CONSIDERACIONES

1.- El recurso de reposición está contemplado en el art. 318 del C.G.P., y es aquel que se interpone ante el mismo juez o magistrado que profirió un auto, con el objeto de buscar que el mismo funcionario sea el que vuelva sobre la providencia, y si es del caso reconsiderarla en forma total o parcial. De igual modo, expresa que este deberá interponerse de forma verbal, inmediatamente a su pronunciamiento, y las razones que invoque el quejoso como fundamento de su inconformidad, deben de estar dirigidas a demostrarle al Juzgado el error que cometió en el específico punto tratado.

2.- Teniendo en cuenta lo expuesto por el recurrente, se observa que su inconformidad radica en la negativa de conceder al togado la facultad de interrogar a quien le ha conferido poder dentro del presente asunto, pues si bien en el interrogatorio oficioso su poderdante puede responder las preguntas que le formule el titular del despacho, aquello no excluye la posibilidad de que el profesional del derecho pueda interrogar a su representado judicial. Agregando que, lo que realmente busca es generar respuestas que durante el interrogatorio de oficio o el de contraparte no se pueden dar.

3.- Refiere el artículo 165 del C.G.P. a los medios de pruebas, en los siguientes términos:

“Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. (Subrayada fuera del texto original)

El juez practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.”

En un caso de contornos similares al que nos ocupa, la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia del 19 de julio de 2022, radicado. 11001-02-03-2022-02165-00. MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque, manifestó: “(...)

“En primer lugar, en la sentencia referida se descartó tener como prueba la declaración de la parte demandada, al determinar que no tiene validez porque «la parte no pudo fabricar su propia prueba», lo que desconoce lo reglado al respecto por el Código General del Proceso.

Lo anterior, porque el régimen probatorio en el proceso civil colombiano está fundado en el postulado de la apreciación razonada de la prueba o sana crítica, en el cual es el juez quien pondera la evidencia y, después de sopesarla acorde con las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica, extrae las conclusiones que de ese laborío emerjan, contrario a lo que acontece en el sistema de la valoración legal o de prueba tasada donde es el legislador quien, por anticipado, establece la forma como el operador judicial debe apreciar cada medio, de modo tal que este solo debe hacer una valoración cuantitativa a efectos de confirmar o desvirtuar su mérito.

(...)

Aunque es difícil negar que la parte tiene interés en las results del juicio y que, por ende, su relato siempre estará enfocado a ofrecer la mejor imagen de sí misma, siendo esa natural vanidad la que ha hecho desconfiar de su dicho, ese recelo parece excesivo, ya que la intención en mostrar la mejor imagen de sí misma no es motivo para que se le tache de embustera ni para que se le crea ciegamente cuando diga algo que le perjudica, dado que su versión puede tener como fin el descubrimiento y, por ende, al ser reveladora, debe ser apreciada en su verdadero contexto, solo que con cierto esmero y cautela, que pasan a ser máximas de la experiencia y suponen auscultar otros parámetros en aras de valorar objetivamente su credibilidad.

En tal caso, debe el juez ser mucho más analítico y prescindir de cualquier valoración subjetiva respecto del declarante, como por ejemplo sus reacciones, la firmeza de la voz, su vestimenta, su seguridad, etc., para darle paso a una apreciación más metódica y reflexiva en la que le preste mayor atención al contexto y al contenido de la reconstrucción factual hecha por la parte, así como a la coincidencia de su narración con otros medios para saber si es verosímil.

De ese modo, si el relato resulta coherente, contextualizado y existen corroboraciones periféricas, como por ejemplo documentos u otros medios de juicio que lo sustenten, es digno de credibilidad y, por tanto, debe ser apreciado en comunión con ellos a fin de esclarecer los hechos que importan para la definición de la litis.

(...)

Nótese cómo en el artículo 165, referido a los medios de prueba, distinguió entre declaración de parte y confesión, lo que reafirmó en el artículo 198 cuando estableció que «el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso» y reiteró al final de ese precepto al consagrar que «la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas».

*Con ello no solo desterró la restricción impuesta por el derecho romano y medieval, sino que le dio carta de naturaleza propia a la declaración de parte y primacía al derecho superlativo que tiene toda persona a ser oída por el funcionario que la va a juzgar, **sin necesidad de que el juez o su contraparte la llamen a interrogatorio, sino por su propia iniciativa**, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso dentro del cual se halla ínsito el derecho de defensa y contradicción, así como la garantía que tiene todo justiciable para ser escuchado y que está prevista en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cuyo tenor «toda persona tiene derecho a ser oída por los jueces o tribunales (...) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil» y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 10 establece que «toda persona tiene derecho (...) a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial». (se resalta)*

Por consiguiente, en el caso objeto de control constitucional el fallador debió apreciar libremente la exposición factual de los demandados y valorarla acorde con las pautas trazadas en el estatuto procesal, a fin de cotejar su contenido con los demás elementos de prueba obrantes en el infolio y extraer, de ese escrutinio, el mayor convencimiento posible y útil para zanjar la pendencia. Como no lo hizo, incurrió en un defecto fáctico que habrá que remediar. (...)”.

Bajo este contexto, según el citado precedente ha determinado que la declaración de parte es un medio probatorio autónomo, se revocará el auto censurado y en su

defecto se decretará la declaración de parte solicitada por el apoderado judicial de R.G & CIA S.A.S.,

Así las cosas, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio No. 0.193 del 18 de abril de 2023, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Decrétese la declaración de parte de la demandante R.G & CIA S.A.S. por medio de su representante legal, la cual será recaudada el día 4 de julio de forma virtual.

46

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Juan Carlos Arteaga Caguasango
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 006
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **52f7c34daa40386375e68f2a88cab2f32ac0124578438379a015dafc8ae8c9e1**

Documento generado en 19/05/2023 07:10:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>